


Remito escrito de incidente de desacato para su analisis.

eliecer de jesus sierra torres <eliecer.sierra@gmail.com>

Mié 04/03/2020 9:22

Para: Juzgado 64 Administrativo Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C. <jadmin64bta@notificacionesrj.gov.co>

 1 archivos adjuntos (7 MB)

out.pdf;

Buenos dias. Adjunto memorial para su tramite.

Señores

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C
E.S.D**

MEDIO DE CONTROL: TUTELA

ACCIONANTE: MARIA MERCEDEZ GONZALES PANTOJA

ACCIONADO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

RADICADO:

ELIECER DE JESUS SIERRA TORRES, mayor y vecino del Municipio de Puerto Colombia Atlántico, identificado con cedula de ciudadanía número 72.005.655 de Barranquilla y T.P. 233.229 del C.S de la J. Conocido en autos anteriores en calidad de apoderado de la señora **MARIA MERCEDEZ GONZALES PANTOJA**, también mayor y domiciliada en Valledupar Cesar, Víctima de la violación de derechos humanos fundamentales referidos en el libelo tutelar principal, respetuosamente promueve ante su despacho **INCIDENTE DE DESACATO**, contra el **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – LA SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR** o contra quien haga sus veces al momento de la notificación. A causa de lo siguiente:

1. Mediante sentencia de fecha 11 de diciembre de dos mil diecinueve 2019, se tutelaron a favor de mi representada, Señora **MARIA MERCEDEZ GONZALES PANTOJA (PRIMERO: AMPARAR** los derechos fundamentales de **PETICION** y al **DEBIDO PROCESO** de la accionante **María Mercedes Gonzales Pantoja**. De conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR al **Ministerio de Educación**, a través de la dependencia correspondiente, que en el término de **CINCO (5) DIAS HABILES** contados a partir de la notificación de la presente decisión remita y comunique respuesta de fondo y efectivo respecto del recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado por la señora **María Mercedes Gonzales Pantoja** El 11 de enero de 2018 contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017. La entidad acreditará al Despacho el cumplimiento de la presente decisión.

TERCERO: NEGAR la protección a los demás derechos fundamentales de conformidad con lo señalado en la parte motiva. **JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCION TERCERA**.

2. Por la razón de negar la protección a los demás derechos invocados como conculcados se presente escrito de apelación a la sentencia en mención el cual fue resuelto por este despacho en los siguientes términos a fecha diecisiete (17) de febrero de 2020:
"... PRIMERO. - CONFIRMASE el fallo de tutela proferido el once (11) de diciembre de 2019 por el Juzgado SESENTA Y Cuatro del Circuito Judicial de Bogotá..."
3. Que a la fecha no hay cumplimiento del fallo en mención puesto que han pasado más de dos meses desde el fallo impugnado y la subdirección de aseguramiento de calidad de la educación no ha dado cumplimiento al fallo puesto no ha dado respuesta de fondo a los recursos.

PETICIONES

PRIMERO: Se de contestación a los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por el accionante – cumplase con lo ordenado por despacho en sentencia.

SEGUNDA: Ordenar lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

"Teniendo en cuenta que este incidente tiene como objeto no solo lograra la efectiva materialización de los derechos fundamentales afectados, si no el de verificar si la Persona o autoridad a la cual se le dio una orden de tutela la ha incumplido y establecer si es el caso imponer o no la sanción respectiva, la necesaria consecuencia del incumplimiento y demostrada la responsabilidad del sujeto de la imposición de la sanción. Así las cosas, si durante el trámite del incidente y antes de que se decida en forma definitiva, el obligado cumple con lo ordenado por el Juez Constitucional, no por eso se abstiene de aplicar la sanción por desacato.

Esta ase impone como consecuencia directa del incumplimiento a una orden de un juez, lo cual es independiente al hecho de que con posterioridad se verifique la observancia de la orden y se restablezca el derecho..." Corte Constitucional.

PRUEBAS Y ANEXOS

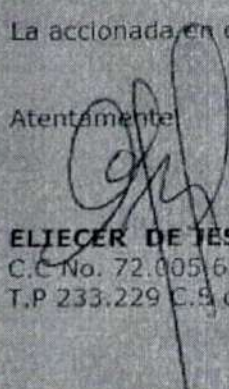
1. Sentencia de primera Instancia
2. Sentencia de Segunda Instancia.

NOTIFICACIONES

El recibo en la Calle 3 trasv 3B 311 Apto 301 Bloque D CJR Ciudad del Mar puerto Colombia Atlántico. Mail sierraeliecerdejesus@gmail.com cel. 3002998697 - 3014336214

La accionada en el registro del libelo inicial:

Atentamente


ELIECER DE JESUS SIERRA TORRES
C.C No. 72.005.655 de Barranquilla
T.P 233.229 C.5 de la J.

93

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN "A"

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020).

Magistrado Ponente: Dr. LUIS MANUEL LASSO LOZANO
Ref: Exp. 110013343064201900386-01
Actor: MARIA MERCEDES GONZALEZ PANTOJA
Accionado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
IMPUGNACIÓN DE TUTELA
SENTENCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora María Mercedes Gonzalez Pantoja contra el fallo de tutela de 11 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Bogotá D.C., que amparó los derechos de petición y debido proceso de la accionante.

El escrito de tutela

La accionante manifestó que solicitó la convalidación del título otorgado por la UNAD Florida.

Mediante la Resolución No. 29414 de 28 de diciembre de 2017, el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación solicitada, razón por la cual el 11 de enero de 2018 presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales a la fecha no han sido resueltos.

Con fundamento en lo expuesto, solicita que se amparen sus derechos a la confianza legítima, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la vida digna y al debido proceso y que, en consecuencia, se ordene a la accionada darle trámite a la convalidación, conforme a la Resolución No. 6950 de 15 de mayo de 2015.

En forma subsidiaria, solicita que se ordene la contestación de los recursos interpuestos o, bien, que se ordene la convalidación parcial del título, conforme a la normativa vigente.

La accionante, actuando a través de su apoderado judicial, en su impugnación manifestó que no se estudió el derecho a la igualdad, pues pese a que se aportaron pruebas sumarias sobre casos iguales el juez a quo no realizó la valoración correspondiente, lo cual condujo al fallo que se cuestiona.

La accionante sostiene que los casos referidos son idénticos al suyo y en consecuencia su título debe ser convalidado, razón por la cual solicita se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar se acceda a sus pretensiones.

Tramite de segunda instancia

El 22 de enero de 2020, pasó el expediente al Despacho del Magistrado sustanciador a efectos de resolver sobre la impugnación interpuesta por la parte actora (Fl. 4, Cdn. de impugnación).

El 10 de febrero de 2020, el Magistrado ponente manifestó su impedimento para conocer del presente asunto (Fl. 5, Cdn. de impugnación).

El 11 de febrero de 2020, el impedimento manifestado fue negado por la Sala dual (Fl. 6 a 8, Cdn. de impugnación).

El 14 de febrero de 2020, pasó el expediente al despacho del Magistrado sustanciador, para lo pertinente.

Consideraciones de la Sala

Toda vez que el argumento de reproche expuesto por la accionante se centra en la falta de análisis del derecho a la igualdad por parte del juez de primera instancia, la Sala procederá sólo a estudiar tal aspecto.

Con respecto al derecho a la igualdad, la Corte Constitucional¹ ha hecho las siguientes precisiones:

"En relación con la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha establecido una carga probatoria en cabeza del accionante², quien tiene el deber de demostrar un criterio de comparación que pruebe su situación de discriminación. Como lo explica la Sentencia T-338 de 2003 con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis:

"Es preciso demostrar un criterio de comparación, como referente valorativo en relación con el cual se lleva a cabo el juicio de igualdad. Así quien pretende alegar que está siendo objeto de un trato discriminatorio debe enfrentar su situación particular a aquella de otras personas que estando en igualdad de circunstancias fácticas y bajo los mismos parámetros legales está teniendo un trato preferente, con lo cual quedaría demostrada la discriminación"

La accionante allegó al expediente copia de los siguientes actos administrativos:

Resolución No. 29414 de 28 de diciembre de 2017, mediante la cual se resolvió desfavorablemente la solicitud de convalidación del título de la señora María Mercedes González Pantoja, por cuanto no satisfacía los requisitos de equivalencia previstos en la Resolución No. 06950 de 15 de mayo de 2015 (Fl. 10 a 13)

Resolución No. 11965 de 23 de julio de 2014, mediante la cual se resolvió favorablemente la solicitud de convalidación de la señora Myriam Rocio Sierra Soler, toda vez que cumplió los requisitos establecidos en la Resolución No. 5547 de 1 de diciembre de 2005 y del Decreto 019 de 2012 (Fl. 14).

Resolución No. 15738 de 26 de septiembre de 2014, mediante la cual se resolvió favorablemente la solicitud de convalidación del señor Mauricio Perdomo Vargas, toda vez que cumplió los requisitos establecidos en la

¹ T-430 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra

² En este sentido Sentencias T-230 de 1994, T-861 de 1998 y T-499 de 2002, entre otras

Resolución No. 5547 de 1 de diciembre de 2005 y el Decreto 019 de 2012 (Fl. 15).

Como se observa, los actos administrativos invocados por la accionante no son aplicables a su caso, pues los actos con los cuales compara su situación fueron resueltos con fundamento en una normativa diferente, esto es, los actos respecto de los cuales el Ministerio de Educación Nacional accedió a la convalidación fueron resueltos con base en la Resolución No. 5547 de 1 de diciembre de 2005 y en el Decreto 019 de 2012, en tanto que la decisión adoptada por la accionada, en relación con el caso de la señora González Pantoja, fue resuelto con fundamento en la Resolución No. 06950 de 15 de mayo de 2015.

Así las cosas, se advierte que los fundamentos jurídicos respecto de los casos que invoca la accionante con relación al de ella son disímiles; en consecuencia, no se advierte un trato discriminatorio respecto de la accionante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN "A"**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMASE el fallo de tutela proferido el 11 de diciembre de 2019 por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

SEGUNDO.- Notifíquese esta providencia a las partes en la forma establecida en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO.- Envíese copia de esta providencia al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

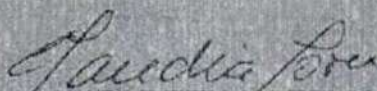
CUARTO.- Dentro del término legal envíese el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión; una vez regrese y si no hay orden alguna emitida por esa Corporación, por Secretaría, **DEVUÉLVASE** al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aprobada en Sala realizada en la fecha.



LUIS MANUEL LASSO LOZANO
Magistrado



CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO
Magistrada



FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA
Magistrado



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN TERCERA

10

Bogotá D.C. once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

JUEZ	ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN No.:	1100133430 64 2019 00386 00
DEMANDANTE:	MARIA MERCEDES GONZÁLEZ PANTOJA
DEMANDADO:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ASUNTO	DECIDE ACCION DE TUTELA

ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA No. 153

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ PANTOJA, en contra del Ministerio de Educación Nacional, solicitando la protección de sus derechos fundamentales de confianza legítima, seguridad jurídica, igualdad, debido proceso y vida digna, presuntamente vulnerados por dicha entidad.

1.1. Pretensiones

La parte tutelante solicitó para proteger los derechos invocados como vulnerados, lo siguiente (fl.6):

"1. Se declaren vulnerados los derechos fundamentales a la confianza legítima, seguridad jurídica, igualdad, debido proceso y vida digna de la accionante y en consecuencia.

2.- Se ordene a darle el trámite la convalidación del MASTER OR ART IN EDUCATION ONLINE EDUCATION, otorgado por la UNAD FLORIDA, Estados Unidos de América, como equivalente al título de MAGISTER DE PROFUNDIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN EDUCACIÓN VIRTUAL, en Colombia, atendiendo los trámites y los términos contenidos en la Resolución 6950 del 15 de mayo de 2015.

3.- De no conceder el derecho, ordenar la contestación del recurso de reposición y en subsidio de apelación incoada virtualmente el 11 de enero de 2018.

4.- tambien podria conceder la convalidacon parcial del titulo de Mater de cuerdo a la normatividad vigente a fin de mermar el perjuicio a mi prohijada. (sic). (...)"

1.2. Hechos

Se resumen los hechos del escrito de tutela de la siguiente manera: (fls. 1 - 5)

1. La señora María Mercedes González Pantoja, curso un master of Art in Education- On line Education en la Universidad UNAD FLORIDA de los Estados Unidos de América.
2. La accionante radicó solicito la convalidación de su título como master en la equivalencia de magister de profundización con énfasis en educación virtual.
3. Mediante resolución No. 29414 el Ministerio de Educación Nacional, negó la convalidación del título de master de la accionante, por lo que el 11 de enero de 2018 presentó recurso de reposición en subsidio apelación contra la resolución el que no ha sido resultó a la fecha.

1.3. Del trámite impreso en esta instancia

En auto del 2 de noviembre de 2019, se admitió la solicitud de tutela, se dispuso notificar por el medio más expedito a la accionada y se ordenó al Ministro de Educación Nacional y al Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que en el término perentorio de dos (2) días, allegaran informe respecto de la solicitud presentada por la parte actora. (fl 52).

El auto admisorio fue notificado en debida forma a la accionada (fl. 53-55), la que dio contestación mediante correo electrónico remitido el día 9 de diciembre de 2019 (fl. 37- 42).

1.4. De la contestación de la demanda¹

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, indicó que el trámite de convalidación solicitado por la señora María Mercedes González Pantoja, debía tramitarse conforme lo establecido en el artículo 16 de la resolución 20797 de 2017; que señala como requisito para la homologación la evaluación académica realizada por la sala del área de

¹ Folios 38-40

salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior -CONACES, la que no sesiona permanentemente, sino esporádicamente para atender las solicitudes por el costo elevado que ésto genera para el Ministerio.

Frente a la mora, el Ministerio indicó que es justificada dada la complejidad del asunto y la obligatoriedad de la intervención del CONACES, por lo que el retardo se encuentra justificado. Lo anterior sumado a la migración e internacionalización de la oferta educativa, que conllevó a que la cartera ministerial se viera desbordada por la cantidad de convalidaciones presentadas, lo que incluso provocó que se restructurara el trámite a través de la resolución 20797 de 2017.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

3.2. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde determinar si la Ministerio de Educación Nacional ha vulnerado los derechos fundamentales de confianza legítima, seguridad jurídica, igualdad, debido proceso y vida digna a la señora María Mercedes González Pantoja al no convalidar el master of Art in Education- On line Education otorgado por la Universidad UNAD FLORIDA de los Estados Unidos de América y no resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación formulado contra la resolución 29414 mediante la que el Ministerio de Educación Nacional, negó la convalidación del título de master.

El despacho encuentra que la accionante formuló recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 29414 ante El Ministerio de Educación, el 11 de enero de 2018, los que a la fecha no han sido resueltos. En ese sentido, tienen preminencia los derechos fundamentales de petición y debido proceso.

3.3. Derecho Fundamental de Petición

Frente al Derecho fundamental de petición, su protección se encuentra contemplada en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y reviste de gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, como quiera que permite la comunicación directa y efectiva entre la Administración y los ciudadanos.

Según lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, el contenido del derecho de petición no comporta recibir cualquier información, sino una respuesta clara, precisa, de fondo y de manera congruente con lo solicitado², lo que significa que el derecho a presentar peticiones se vulnera siempre que el obligado a responder, no lo hace dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico y cuando la respuesta evade la solicitud planteada; es decir, en los casos en que la autoridad no resuelve de fondo el asunto que le fuera planteado.

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de este derecho, en los siguientes términos³

(i) El derecho de petición es fundamental; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible⁴; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares⁵; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición⁶ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁷; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;⁸ y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.⁹

El derecho de petición fue regulado de manera específica por el legislador, quien ha impuesto la obligación a las entidades de pronunciarse en precisos y determinados términos. En efecto, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, dispone que: **i) toda petición, salvo aquellas cuya resolución esté sometida a un término especial, debe resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción; ii) las peticiones que versen sobre documentos e información deben resolverse dentro de los diez días siguientes a su**

² En las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-1060 A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fueron sintetizadas las líneas características del derecho de petición.

³ En las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-1060 A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fueron sintetizadas las líneas características del derecho de petición.

⁴ Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

⁵ Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁶ Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

⁷ Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

⁸ Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁹ Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

recepción; y *iii*) las peticiones por las cuales se eleve una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deben resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

Con relación al derecho fundamental al debido proceso, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia lo consagró así:

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

En tal sentido, el debido proceso es considerado como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, ya que las actuaciones procedimientos y procesos administrativos que aparezcan consecuencias para los administrados deben desarrollarse con respeto de las garantías inherentes a tal derecho fundamental.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-983 del 01 de diciembre de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva señaló:

"4.2 En materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y de contera evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido,

esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.

"De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha expresado que de la aplicación del principio del debido proceso administrativo se derivan consecuencias importantes, tanto para los asociados, como para la administración pública. Desde la perspectiva de los asociados, del derecho al debido proceso se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio.

"En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.

"Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa". (Negrilla del despacho).

Ahora bien, tratándose de solicitudes de convalidación de títulos extranjeros, la Resolución 20797 del 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, estableció un término especial de dos (2) y cuatro (4) meses dependiendo del caso, así:

"Artículo 12. Términos para decidir. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, las solicitudes de convalidación que se estudien mediante el criterio de acreditación o reconocimiento, de que trata el numeral 1 del artículo 11 de esta resolución, se resolverán en un término **no mayor a 2 meses**. Así

mismo, y conforme con la disposición legal citada anteriormente, las solicitudes de convalidación que se estudien mediante los demás criterios que trata el artículo 11 de esta resolución, se resolverán en un término **no mayor a 4 meses**".

A su vez, los criterios aplicables para la convalidación de títulos que determinan el término de pronunciamiento por parte de la administración, fueron establecidas por el artículo 11 de la misma resolución así:

"Artículo 11. Evaluación de los Criterios aplicables para la convalidación de títulos. Superado el examen de legalidad, el Ministerio de Educación Nacional determinará cuál de los siguientes criterios resulta aplicable para evaluar el título que se pretende convalidar:

1. Acreditación o Reconocimiento de Calidad. Este criterio es aplicable cuando el título sometido a convalidación corresponde a un programa acreditado o es expedido por una institución acreditada por parte de una entidad gubernamental u organización privada autorizada oficialmente para ello en el país de origen del título. Así mismo, este criterio se aplica para los títulos otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de origen del título y que sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación de la institución o del programa académico, o del reconocimiento.

2. Precedente Administrativo. Este criterio es aplicable cuando el título sometido a convalidación es similar a títulos que han sido evaluados académicamente, de acuerdo con el criterio de que habla el numeral 3 del presente artículo, por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), órganos o pares evaluadores, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
(...)

3.-Evaluación académica. La evaluación académica es el proceso por medio del cual la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, órganos o pares evaluadores estudia, valora y emite un juicio sobre la formación académica adquirida en el exterior por la persona que solicita la convalidación de un título con la finalidad de determinar la existencia de diferencias sustanciales con los programas ofertados en el territorio nacional que permitan o impidan la convalidación de éste.
(...)

Parágrafo 2. Para la convalidación de títulos en el área de la salud, el proceso se surtirá bajo el criterio de evaluación académica al que se hace referencia en el numeral 3 del presente artículo".

El artículo 13 de la ley 20797 de 2017, estableció que el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución motivada decidirá de fondo la solicitud, convalidando o negando la convalidación del título, y que contra el acto administrativo que decide la solicitud de convalidación procedía el recurso de reposición ante la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y el de apelación ante la Dirección de Calidad de la Educación Superior; pero nada dijo sobre el término con el que contaba la administración para resolverlo.

De otro lado, el artículo 34 de CPACA, dispuso que las actuaciones administrativas se regularían por lo previsto en dicho estatuto, sin perjuicio de los procedimientos establecido por leyes especiales, así:

"Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código".

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 83 y 86, se encargó del silencio administrativo en actuaciones administrativas, así:

"Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. (...)"

"Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. (...)"

Así las cosas, el silencio administrativo se genera por el hecho de no ser resuelta una petición por la administración; de acuerdo a lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, para que haya silencio administrativo es necesario que transcurran tres meses desde que se presentó la petición sin que se haya notificado decisión alguna al interesado.

Para que se configure el silencio administrativo negativo respecto a los recursos, es necesario que transcurran dos meses desde que el interesado haya interpuesto el recurso de reposición o apelación según el caso, contra la decisión tomada por la administración sin que se haya notificado por parte de esta resolución alguna al respecto, de conformidad con lo señalado en el inciso primero artículo 86 del CPACA,

El silencio administrativo positivo solo se da en los casos expresamente señalados en la ley; que no es del caso bajo estudio, por lo que en este caso estamos frente al silencio administrativo negativo.

3.4. Caso Concreto

La accionante solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional la convalidación de su título como un master of Art in Education- On line Education otorgado por la Universidad UNAD FLORIDA de los Estados Unidos de América, el que fue negado por la accionada mediante resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017.

La señora MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ PANTOJA formuló ante el Ministerio de Educación el día 11 de enero de 2018 recurso de reposición en subsidio apelación contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017, mediante la cual se le negó la convalidación del título de master, como se evidencia a folio 34 del plenario.

Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 20797 de 2017 determinó el procedimiento que debía observarse para lograr la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, precisando en el artículo 12 el término dispuesto para atender la solicitud de convalidación, siendo éste de máximo dos (2) meses en los casos en que i) la institución que otorgó el título o el programa académico cursado se encuentre acreditado y ii) cuando el título que se somete a convalidación, corresponde a un programa académico que hubiese sido reconocido con altos estándares de calidad avalados por el país de origen y que sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional.

Para los eventos en que no encuadren dentro de los anteriores criterios, el artículo 12 dispuso que dicho trámite debería resolverse en un término no mayor a cuatro (4) meses.

El artículo 11 de la citada resolución en el párrafo 2, preceptuó que la convalidación de los títulos del área de la salud se surtiría bajo el criterio de "evaluación académica", es decir, el término para decidir del trámite sería el de máximo cuatro (4) meses.

Frente a la importancia del trámite de homologación de títulos extranjeros, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T-430-2014:

"Con ese punto de partida la Corte reconoció la importancia constitucional de efectuar la convalidación de los diplomas de educación expedidos en el exterior, teniendo en cuenta el interés general y la necesidad de exigir títulos de idoneidad, y luego analizó el contenido de la Resolución 5547 de 2005, en la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior. Reprodujo los artículos 3°, 8°, 9° y 10° de esa norma y concluyó que la aplicación "rigurosa" de ese procedimiento protege los derechos de quienes efectúan estudios fuera de Colombia y de todos los ciudadanos frente a las actividades que implican riesgo social."

Ahora bien, la ley 20797 de 2017, no regula u termina para que la administración resolviera los recursos de reposición y apelación. En ese sentido el término a juicio del despacho es de dos (2) meses, en aplicación de lo previsto en los artículos 34, 83 y 86 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, los recursos presentados por la accionante el 11 de enero de 2018, contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017, tenían que ser resueltos con plazo límite el **11 de marzo de 2018**, pero no obra respuesta de decisión.

A pesar que en el presente evento, a juicio del Despacho operó el silencio administrativo negativo frente a los recursos (art. 83 de la Ley 1437 de 2011) lo cierto es que no hay prueba de que la interesada hubiese acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto ficto o presunto, por lo que es viable el amparo del derecho al debido proceso.

Frente a la vulneración al derecho a la **igualdad**, si bien en cierto se mencionó que el mismo título había sido convalidado por el Ministerio de Educación en favor de otras personas y se aportó copia de las resoluciones que así lo acreditaban, no puede este despacho establecer con certeza que se traten de casos exactamente iguales, pues no conoce los antecedentes ni expedientes administrativos de los casos que reporta el accionante con un trato distinto al suyo, razón por la que, se negará la solicitud de amparo respecto a este derecho fundamental.

Ahora bien, la accionante solicita se ampare la **seguridad jurídica y confianza legítima**, al respecto el Despacho debe decir que tal garantía ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causa

constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En el caso bajo estudio como quiera que no se encuentra acreditado que en casos iguales la administración haya adoptado disímiles decisiones, no se evidencia su vulneración.

Con relación a la vulneración del derecho fundamental a la **vida en condiciones dignas** el que según la jurisprudencia supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que éste derecho implica cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona; en el caso bajo estudio la parte accionante no demostró vulneración a este derecho fundamental, por lo que su amparo será negado.

En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales de **petición y debido proceso** de la señora **María Mercedes González Pantoja**, por lo que se ordenará al Ministerio de Educación, que en el término de **CINCO (5) DÍAS** contados a partir de la notificación de la presente decisión remita respuesta de fondo y efectiva respecto del recurso de reposición en subsidio apelación formulado por la accionante el 11 de enero de 2018, contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017.

Con fundamento en los anteriores argumentos, este estrado judicial resuelve el problema jurídico, en el sentido de declarar que **El Ministerio de Educación**, vulneró los derechos fundamentales de petición y debido proceso de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de **PETICIÓN** y al **DEBIDO PROCESO** de la accionante **María Mercedes González Pantoja**, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR al **Ministerio de Educación**, a través de la dependencia correspondiente, que en el término de **CINCO (5) DÍAS** contados a partir de la notificación de la presente decisión remita y comunique respuesta de fondo y efectiva respecto del recurso de reposición y en subsidio apelación formulado por la señora **María Mercedes González Pantoja** el 11 de enero de 2018 contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017. La entidad acreditará al Despacho el cumplimiento de la presente decisión.

TERCERO: NEGAR la protección a los demás derechos de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

CUARTO: Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991.

QUINTO: En firme la presente providencia y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÁLVARO CARREÑO VELANDÍA
Juez



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCION TERCERA
CARRERA 57 NO. 43-91

42

INFORME AL DESPACHO

Juez: ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
Medio de control : INCIDENTE DE DESCATO
Ref. Proceso: 2019-00386

Hoy 05 de marzo de 2020, ingresa al Despacho el proceso de la referencia con solicitud de incidente de desacato (fls.1 a 21).

Sírvase Proveer.

OSCAR ROBERTO REYES SAAVEDRA
Secretario



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá, D.C, seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020).

JUEZ: Álvaro Carreño Velandia
MEDIO DE CONTROL: Incidente de desacato –
Acción de tutela
RADICACION No.: 110013343064-2019-00386-00
DEMANDANTE: María Mercedes González Pantoja
DEMANDADO: Nación- Ministerio de Educación

INCIDENTE DE DESACATO
REQUIERE PREVIO APERTURA


Previo a tramitar el incidente de desacato promovido por la parte demandante en memorial remitido el 4 de marzo de 2020 (fl. 1 a 3 C desacato), se dispone:

PRIMERO: REQUERIR a la Ministra de Educación, **María Victoria Angulo González**, y al Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación, **Germán Alirio Cordón Guayambuco**, para que en el término tres (3) días acrediten el cumplimiento de la sentencia del 11 de diciembre de 2019, en el sentido de remitir y comunicar respuesta de fondo y efectiva respecto del recurso de reposición en subsidio apelación formulado por la señora María Mercedes González Pantoja el 11 de enero de 2018, contra la resolución 29414 del 28 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: REQUERIR al Jefe de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Educación Nacional, para que en el término de **cuarenta y ocho (48) horas** **haga cumplir el fallo de tutela del 11 de diciembre de 2019** y en el mismo término abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela.

TERCERO: Cumplido lo anterior, por Secretaría ingrese el expediente al Despacho para adoptar la decisión correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
JUEZ

INCIDENTE DE DESACATO -
ACCION DE TUTELA
110013343064-2019-00386-00
Maria Mercedes González Pantoja
Nación- Ministerio de Educación

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
-SECCIÓN TERCERA-**

Por anotación en **ESTADO** notifico a las partes la
providencia anterior hoy **9 de marzo de 2020** a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.).-

Oscar Reyes Saavedra
Secretario